



La calificación baja, la confianza también

Por Moisés Gómez Reyna

Cuando una calificadoras baja la nota de un país, el mensaje de fondo es sencillo: prestar dinero a ese país se vuelve más riesgoso. Y cuando algo se percibe como más riesgoso, cuesta más. Eso significa deuda más cara, menos margen para gastar, más cautela de los inversionistas y, al final, una economía que avanza más lento. Por eso la reducción de la calificación de México no debe leerse como un asunto lejano de banqueros o financieros. Es una señal que puede terminar afectando el empleo, la inversión, las obras públicas y el crecimiento de todos los días. El problema es que México parece haber entrado en un círculo vicioso. Si baja la calificación, el gobierno puede pagar más intereses por su deuda. Si paga más intereses, tiene menos dinero disponible para infraestructura, salud, seguridad, educación o apoyos productivos. Si hay menos inversión pública y privada, la economía crece menos. Y si la economía crece menos, recauda menos y se vuelve más difícil ordenar las finanzas públicas. Esa es la trampa: cada mala señal alimenta la siguiente. Moody's bajó recientemente la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, aunque mantuvo la perspectiva estable, citando debilidades fiscales, bajo crecimiento y apoyo continuo a Pemex.

Pero las calificadoras no están viendo solamente números fríos. No están castigando una reforma aislada ni un dato suelto. Están leyendo el conjunto del país: deuda, crecimiento, ingresos públicos, gasto comprometido, Pemex, seguridad, Estado de derecho y calidad institucional. En otras palabras, no sólo preguntan cuánto debe México; también preguntan qué tan confiable es el entorno para invertir, producir, litigar, competir y planear a largo plazo.

Ahí entran las reformas constitucionales y legales de los últimos dos años. La reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, el fortalecimiento de empresas públicas y la concentración de funciones en el Estado mandan una señal delicada: menos contrapesos, menos especialización técnica y más incertidumbre sobre las reglas del juego. Para una persona común esto puede sonar abstracto, pero para una empresa que decide si invierte cientos de millones de dólares en una planta, una línea de producción o un centro logístico, la certeza jurídica es casi tan importante como la ubicación geográfica. Pemex también pesa. No sólo por su deuda, sino porque consume capacidad fiscal. Cada vez que el gobierno tiene que respaldarla, rescatarla o absorber parte de sus presiones financieras, reduce espacio para otras prioridades. Fitch mantuvo en abril de 2026 la calificación de México en BBB- con perspectiva estable, pero señaló retos de consolidación fiscal y crecimiento débil. ([Fitch Ratings][2]) Es decir, México conserva grado de inversión, pero ya no tiene demasiado margen para equivocarse.

El matiz es importante: México no está en una crisis terminal ni ha dejado de ser atractivo. Sigue teniendo ventajas enormes: frontera con Estados Unidos, T-MEC, una base manufacturera fuerte, talento, experiencia exportadora y una oportunidad histórica por el nearshoring. La inversión puede seguir llegando, y de hecho llega. La pregunta sería no es si México recibirá inversión, sino cuánta inversión adicional podría estar perdiendo por falta de seguridad, energía suficiente, infraestructura moderna, reglas estables y confianza institucional. Por eso la baja de calificación debe entenderse como una advertencia política y económica al mismo tiempo. México no enfrenta solamente un problema de deuda o de bajo crecimiento; enfrenta un problema de confianza. Y cuando la confianza se desgasta, todo se encarece: el crédito, la inversión, la contratación y hasta la paciencia de los mercados. El riesgo no es que México deje de ser atractivo; el riesgo es que se vuelva menos confiable justo cuando el mundo lo necesita más.

Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional